

20231302121441

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20231302121441

Fecha: 04-12-2023

Código de dependencia 130
OFICINA ASESORA JURIDICA

Bogotá, D.C., 04-12-2023

Respetada Juez

Adriana Marcela Díaz Martínez

Juzgado Segundo Administrativo Oral Del Circuito Judicial De Duitama

Correo electrónico: jadmin02dui@notificacionesrj.gov.co

Ciudad

Referencia: Acción contractual (Incumplimiento contrato de prestación de servicios 02 del 1 de julio de 2019)
Demandante: Asociación de Prestadores de Servicios Ecoturísticos de Güicán y el Cocuy "ASEGUICOC"
Demandado: Parques Nacionales Naturales de Colombia
Radicado: 15238333300220230008000
Etapas procesales: Contestación demanda acción contractual

Neil Armstrong Lozano Falla, identificado con la cédula de ciudadanía 80.418.734 y tarjeta profesional 90.880 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando como apoderado de la Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales de Colombia, de acuerdo con el poder anexo, comedidamente solicito se **NIEGUEN LAS PRETENSIONES**, para lo cual, me permito contestar la demanda conforme a las siguientes **CONSIDERACIONES**:

1. De las excepciones de fondo en contra de las pretensiones con la fundamentación fáctica y jurídica de la defensa.

1.1. Excepción caducidad de la acción de controversias contractuales.

El literal j) del numeral 2 (En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad) del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en su parte pertinente preceptúa:

"j) En las relativas a contratos el término para demandar será de dos (2) años que **se contarán a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento.**" (resaltado fuera de texto)

Al respecto, es del caso señalar que la parte accionante como fundamentos de hecho y de derecho para solicitar el reconocimiento y pago de los perjuicios ocasionados por el presunto incumplimiento del contrato de prestación de servicios 002 del 1 de julio de 2009, atribuible a la Unidad Administrativa de Parques Nacionales Naturales de Colombia, resalta:

"El referido contrato estuvo suspendido por un total de doce (12) meses, tiempo durante el cual ASEGUCOC, no pudo llevar a cabo la actividad económica."

"Posterior la finalización de la segunda acta de suspensión el contrato debería ser reanudado, siendo esto en fecha 03/12/2017, hecho que injustificadamente no sucedió."

"A partir del día 03/12/2017, no fue posible adelantar la ejecución del contrato suscrito entre las partes, pese a las múltiples y reiteradas peticiones por parte de "ASEGUCOC", para dar continuación al contrato, LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DEL MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, guardo silencio y no dio solución a la situación narrada, causando con ello un daño moral, material y económico, el cual mis prohijados no estaban obligados a soportar."

En ese sentido, no se resiste la más mínima discusión jurídica para concluir que al momento en que la parte demandante radica la solicitud de conciliación prejudicial ante la Procuraduría General de la Nación, como requisito de procedibilidad, esto es, 18 de diciembre de 2022, la acción judicial de controversias contractuales ya se encontraba caducada, es decir, que del 29 de noviembre de 2017 (fecha en que se reanuda el contrato), al 18 de diciembre de 2022 (fecha de radicación de la solicitud de conciliación prejudicial), transcurrieron más de 5 años.

La cláusula primera del acta de suspensión No. 2 del contrato objeto de la presente discusión, dispone:

*"Suspender el plazo de ejecución y la vigencia del contrato de Prestación de Servicios Ecoturísticos Comunitarios No. 002 de 2009, a partir del 2 de julio de 2017, **reiniciando la ejecución contractual el día 29 de noviembre de 2017.**" (resaltado fuera de texto)*

En ese sentido, es claro que a partir del 30 de noviembre de 2017, se materializa la imposibilidad según el contratista de continuar ejecutando el contrato, de tal

manera que la caducidad de la acción contractual se concretó el 29 de noviembre de 2019.

Por lo anterior, comedidamente solicito del Honorable Operador Judicial, declarar probada la excepción de caducidad de la acción y por consiguiente negar las pretensiones, es de reiterar que de acuerdo con el literal j) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, la caducidad se contabiliza a partir del hecho perturbador.

1.2. Excepción de falta de legitimación en la causa por activa en relación con las pretensiones del pago de los perjuicios morales a favor de terceros.

La parte demandante solicita el reconocimiento y pago de los perjuicios morales a favor de terceros, sin que se allegue los respectivos poderes que le permita actuar judicialmente en nombre de ellos, como tampoco se anexa el documento idóneo que acredite que la Asociación de Prestadores de Servicios Ecoturísticos de Güicán y el Cocuy "ASEGUICOC", los representa.

La parte accionante sustenta:

*"...Lo anterior mencionado como quiera que se agotó lo contemplado en la cláusula número diecisiete (17) (solución directa de controversias) sin obtener solución alguna, consecuencia de ello **múltiples familias vieron perjudicado su mínimo vital además del daño moral ante la incertidumbre de la subsistencia de sus consanguíneos dependientes, pues dependían de los ingresos fruto de la actividad económica del accionante**, además los asociados son campesinos que dejaron de lado la actividad agropecuaria, para dedicarse a la prestación de servicios turísticos, como fue el objeto del contrato suscrito, mismo que se vio interrumpido sin razón justificable." (resaltado fuera de texto)*

Sobre el particular, se resalta que la relación contractual se encuentra trabada exclusivamente entre la Asociación de Prestadores de Servicios Ecoturísticos de Güicán y el Cocuy "ASEGUICOC", persona jurídica, y la Unidad Administrativa Parques Nacionales Naturales de Colombia.

Sobre la excepción de falta de legitimación en la causa por activa en las controversias contractuales, el Consejo de Estado en su abundante jurisprudencia precisa:

"... atendiendo al principio de la relatividad de los contratos, se deduce que la legitimación en la causa les asiste a los sujetos sobre los cuales recayeron los derechos y obligaciones pactados en el contrato que

suscito la controversia, pues como lo explica este principio, los contratos solo producen efectos entre las partes que lo celebran, y por ende, únicamente a ellas perjudican y aprovechan sus efectos.”
(artículo transcrito de la publicación Legis, Ámbito Jurídico del 6 de febrero de 2023)

En ese sentido, se hace necesario declarar probada la presente excepción.

- 1.3. Excepción de mérito ausencia de un acervo probatorio que de forma material y efectiva demuestre la causación de los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante y daño emergente, reclamados por la parte actora.

Sobre el particular, el Consejo de Estado, máximo tribunal de cierre de lo contencioso administrativo, en lo que respecta al lucro cesante y daño emergente, es claro en afirmar que no es suficiente con el incumplimiento de las obligaciones contractuales para proceder a su reconocimiento, se hace necesario probar su existencia.

En sentencia del 14 de abril de 2010, proceso 25000-23-26-000-1997-03663-01(17214), magistrada ponente Ruth Stella Correa Palacio, la corporación judicial en comento, concretó:

"RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL - Configuración. Operancia / RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL - Existencia del daño / DAÑO - Principios de reparación integral y de equidad.

*Con todo, **para que exista una responsabilidad contractual, no basta el simple incumplimiento de la obligación contractual o legal** (comportamiento culposo del agente que genera la responsabilidad), sino que **es menester que el demandante haya sufrido un daño, entendido como la lesión, quebranto o menoscabo de las facultades jurídicas que tiene una persona para disfrutar de un bien patrimonial o extramatrimonial, y el cual para que sea indemnizado debe ser cierto y no eventual o hipotético.** En el ámbito de la responsabilidad contractual de la Administración Pública, en aplicación del inciso primero del artículo 90 de la Constitución Política en concordancia con el artículo 50 de la Ley 80 de 1993, cuando ella incumple sus obligaciones "...el contratista del Estado tiene derecho a que la administración le indemnice la totalidad de los daños derivados del incumplimiento contractual, tanto los que se manifiestan como una disminución patrimonial (daño emergente), como los que se traducen en la privación de las utilidades o ganancias que esperaba percibir por la imposibilidad de ejecutar total o*

parcialmente el proyecto (lucro cesante)...”, daño contractual o lesión del derecho de crédito que debe ser cierto, particular y concreto, no eventual ni hipotético, tener protección o tutela jurídica y su existencia establecerse plenamente en el respectivo proceso con las pruebas que reposen en él. Ese daño contractual o menoscabo al derecho de crédito debe ser indemnizado plenamente, dado que, como señala la doctrina, “...se debe reparar el daño y nada y nada más que el daño, por lo cual se destaca la importancia que en este terreno tienen las pruebas, pues se requiere certidumbre de la realidad del perjuicio y de su cuantía, para así proferir las condenas pertinentes...”. “...La explicación que se da a esta regla se apoya en un principio general del derecho: si el daño se indemniza por encima del realmente causado, se produce un enriquecimiento sin causa a favor de la “víctima”, si el daño se indemniza por debajo del realmente causado, se genera un empobrecimiento sin justa causa para la víctima...” Por eso, en materia de indemnización del daño resarcible rigen los principios de la reparación integral y de equidad. (resaltado fuera de texto)

Según la sentencia citada, el daño emergente y lucro cesante se define como:

“...se ha sostenido que el daño emergente (damnum emergens) es la disminución patrimonial inmediata a causa del hecho que se juzga, representada en la pérdida de elementos económicos bien por los gastos que ellos significaron en su adquisición, ora por los desembolsos futuros para recuperarlos o enmendarlos, incluso, por la constitución de un pasivo, es decir, un empobrecimiento debido a que un bien salió o saldrá del patrimonio. Al paso que el lucro cesante (lucrum cessans), es la frustración de las utilidades, ventajas o lucro o pérdida de un interés futuro a un bien o a la realización de ciertos aumentos patrimoniales, por el mismo hecho, es decir, supone todas las ganancias ciertas que han dejado de percibirse o que se reportarían...”

En cuanto al daño emergente, la parte actora allega como prueba una relación de valores identificada como cálculo del daño emergente, previo a la siguiente manifestación:

“C. Por daño Emergente: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTO CATORCE MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS MONEDA COLOMBIANA (\$189.614.212.00) MONTO CALCULADO SEGÚN DETALLE INCLUIDO EN ANEXO 7”

En este orden de ideas, de acuerdo con la definición de daño emergente dada por el Consejo de Estado, se evidencia que la parte actora no logra identificarlo y probarlo.

De acuerdo con lo establecido por las partes en la cláusula 8 del contrato 002 del 1 de junio de 2009, se pactó:

"En virtud del presente contrato, el CONTRATISTA se compromete a pagar a la UNIDAD cada mes, contado a partir de la suscripción del acta de inicio, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del total de las utilidades que haya percibido durante el mes inmediatamente anterior a aquel en que debe efectuarse el desembolso de dicha contraprestación. Este pago deberá realizarse dentro de los primeros diez (10) días hábiles de cada mes."

De la lectura de la cláusula transcrita, es claro que con la suspensión e inejecución del contrato, es imposible jurídicamente que se causen daños materiales en la modalidad de daño emergente atribuibles a la parte demandada. Obsérvese que quien recibe de primera mano las utilidades de la prestación del servicio es la parte actora, de las cuales, el 10% debe ser entregadas a la Unidad Administrativa de Parques, situación distinta son las utilidades dejadas de percibir por la suspensión del contrato (lucro cesante), que tampoco se logran demostrar como mas adelante se demostrará.

El anexo 7 solicitado como prueba por la parte actora, no presta ningún servicio para demostrar los daños emergentes, dicho documento no evidencia que con la suspensión del contrato se generó, por ejemplo, la pérdida de una inversión de recursos y bienes propios, entre otros.

Ahora bien, en lo referente al daño material en la modalidad del lucro cesante, la parte actora tampoco logra probarlos, tanto la jurisprudencia como la doctrina coinciden en afirmar que los citados daños deben ser ciertos de manera tangible, actuales o ulteriores, desprovistos de meras expectativas o conjeturas.

Como prueba, la parte actora allega el anexo 6 identificándolo como calculo del lucro cesante, referenciado unos valores ausentes de una carga argumentativa y probatoria que permita evidenciar cuales fueron los criterios reales y tangibles que se tuvieron en cuenta para su tasación. Es de reiterar, en la acción de controversias contractuales, quien alega el incumplimiento de la contraparte y pide la indemnización de perjuicios debe acreditarlos en legal forma.

Tal y como es de conocimiento de la asociación ASEGUICOC, a partir del mes de febrero de 2016, en el sendero lagunillas que conduce hacia la Casa conocida como Sisuma, lugar asociado al objeto del contrato No. 002 de 2009, la

comunidad del Municipio del Cocuy se opusieron por vías de hecho al tránsito de las personas, argumentando que por el desarrollo del Ecoturismo en el Área protegida se estaban contaminando los afluentes hídricos que nacen en el PNN El Cocuy; en especial se referían a la zona circundante del predio Sisuma, planta que prestaba servicios de alojamiento y alimentos y bebidas a visitantes.

Con el cierre del sendero no se permitió el acceso al área protegida, los manifestantes inicialmente fueron habitantes del municipio del Cocuy y posteriormente se unió a esta protesta la comunidad indígena U'wa, que además aducen su ancestralidad en el territorio.

Esta situación desembocó en el cierre del área protegida, bajo Resolución 041 de 29 de julio del 2016, fundamento del acta de suspensión No 001 suscrita el día 30 de noviembre de 2016 por el representante legal de Asegucoc y la unidad de PNN, en ella se dejó expresa constancia que la suspensión obedecía a circunstancias de fuerza mayor que de ninguna manera pueden ser atribuidas a incumplimiento en las obligaciones contractuales adquiridas por las partes.

Así las cosas, es claro que por circunstancias ajenas a la voluntad de las partes contractuales (caso fortuito o de fuerza mayor), no es posible continuar con la ejecución del contrato, lo que por obvias razones, se desvanece la posibilidad real de haber sufrido daños materiales en la modalidad de lucro cesante.

Aunado a lo anterior, se presentó el fenómeno de la pandemia COVID 19, hecho notorio impredecible que impactó negativamente las relaciones contractuales.

En ese orden de ideas, los anexos 6 y 7 alegados como pruebas en la demanda, no logran cumplir su fin, desde el punto de vista procesal, tal y como lo enseña el profesor Hernán López Blanco, el objeto de la prueba corresponde a que el operador judicial pueda tener la certeza de los hechos base de las pretensiones.

El Consejo de Estado en su abundante jurisprudencia, entre ellas, la sentencia del 19 de octubre de 2020, proceso 2020-00049-00, magistrada ponente, Rocío Araujo Oñate, reiteró que los medios de pruebas deben garantizar su conducencia, pertinencia y utilidad para los fines que se persiguen de acuerdo con lo establecido en los artículos 164 y 168 del Código General del Proceso.

"la conducencia consiste en que el medio probatorio propuesto sea adecuado para demostrar el hecho; la pertinencia, por su parte, se fundamenta en que el hecho a demostrar tenga relación con los demás hechos que interesan al proceso. La utilidad, a su turno, radica en que el hecho que se pretende demostrar con la prueba no debe estar ya demostrado con otro medio probatorio."

Parques Nacionales Naturales de Colombia

Nombre Dependencia – Grupo – Área - Territorial

Dirección: Calle 74 No. 11 - 81, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 353 2400

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 129722

Bajo el marco jurisprudencial transcrito, la relación de las cifras contenidas en los anexos 6 y 7 allegados por la parte actora, enunciándolas como pruebas, no logran establecer y demostrar la ocurrencia de los daños materiales en la modalidad de daño emergente y lucro cesantes, **la relación de cifras no cuenta con los soportes que den fe de su origen.**

Por otra parte, en cuanto a la pretensión que se transcribe a continuación, se resalta nuevamente la ausencia de pruebas, que permitan su reconocimiento y pago, además dicha pretensión resulta ser ambigua, no se logra explicar con claridad el nexo causal entre el hecho y el deber de indemnizar:

*“B. Por daños materiales: LA ASOCIACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS ECOTURISTICOS DE GUICAN Y EL COCUI “ASEGUICOC” Nit: 900.265.658-8, por la afectación causada por el incumplimiento del referido, consecuencia de ello **fue imposible extraer algunos inventarios de propiedad**, pues fueron elementos los cuales causa de su corta vida útil **no fueron relacionados dentro del inventario adjunto, ejemplo de ello son sabanas**, cortinas, bajillas etc., mismos que eran usados para la ejecución del contrato celebrado, la cuantía de ello está estimada en \$ 15.000.000, representada en los ítems relacionados, y objetos de trabajo menor.”*
(resaltado fuera de texto)

Así las cosas, es claro que la presente reclamación esta llamada al fracaso por falta de pruebas.

En conclusión, las pretensiones relacionadas con el reconocimiento y pago de los daños morales y materiales reclamados, se encuentran ausentes de pruebas que permitan evidenciar su causación, en otras palabras, la parte accionante NO logra probar de forma idónea los daños a resarcir, se allegan unos listados de nombres y cifras que no contienen los debidos soportes que permitan evidenciar el nexo causal entre el hecho y los resultados del daño.

El Consejo de Estado, ha dispuesto que en materia de la acción judicial de controversias contractuales, la justicia es rogada, tal y como lo reiteró en sentencia del 29 de abril de 2015, proceso 2004-00086-01 (36945), magistrado ponente Jaime Orlando Santofimio Gamboa, en los siguientes términos:

“...controversia contractual. en virtud del principio de justicia rogada, que rige planamente tratándose del medio de control de controversias contractuales, corresponde a la judicatura pronunciarse únicamente respecto de aquellos actos y/o contratos que han sido objeto de la demanda y conforme a los cargos o alegaciones de nulidad esbozados

en el mismo libelo y ello por cuanto se trata de una pretensión de tipo subjetiva cuyo interés corre por cuenta de la parte que se considere afectada con un determinado acto de la administración pública.”

En este orden de ideas para el caso que nos ocupa, la demanda adolece de una carga argumentativa, explicativa y probatoria idónea, que impide que se conceda las pretensiones.

- 1.4. Excepción de fondo, existencia de un caso fortuito y de fuerza mayor que exime de toda responsabilidad a la Unidad de Parques Nacionales Naturales de Colombia.

Como es de conocimiento de los sujetos contractuales, la suspensión del contrato No. 002 de 2009 no obedeció al capricho de la Unidad Administrativa de Parques Nacionales Naturales, acaecieron hechos externos que conllevaron adoptar de común acuerdo proceder de conformidad, tal y como consta en las respectivas actas de suspensión.

En ese sentido, la parte demandante NO logra probar que a partir de la reanudación del contrato y durante su vigencia, existían las condiciones aptas que permitieran continuar con su ejecución, menester es reiterar, quien atribuye un incumplimiento le corresponde probarlo.

Caso fortuito y de fuerza mayor que se materializó con la oposición de la comunidad que no permitió la ejecución del contrato, así como el fenómeno de la pandemia COVID 19 (hecho notorio).

Aunado a lo anterior, la Unidad Administrativa de Parques Nacionales, en cumplimiento de sus obligaciones institucionales se vio abocada a adoptar las medidas administrativas necesarias que comportaron el cierre temporal del Parque Nacional Natural El Cocuy:

Resolución 005 del 8 de enero de 2010
Resolución 061 del 7 de febrero de 2020
Resolución 137 del 16 de marzo de 2020

Resoluciones que gozan de presunción legal, tal y como lo establece el artículo 88 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo:

"Presunción de legalidad del acto administrativo. Los actos administrativos se presumen legales mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Cuando fueren suspendidos, no podrán ejecutarse hasta tanto se resuelva

definitivamente sobre su legalidad o se levante dicha medida cautelar.”

En ese sentido, solicito del Operador Judicial declarar probada la excepción de la existencia de un caso fortuito de y fuerza mayor, que impide el reconocimiento de las pretensiones de la demanda.

2. Del pronunciamiento sobre las pretensiones y los hechos de la demanda, que se constituyen en excepciones en contra de las mismas.

Tal y como quedó demostrado en las excepciones de mérito, las pretensiones están llamadas al fracaso, en primer lugar, al momento en que se radica ante la Procuraduría General de la Nación, la solicitud de conciliación prejudicial, la acción contractual se encuentra caducada, el presunto perjuicio se causa a partir de la reanudación del contrato, obsérvese que la sustentación de la demanda esta dada en que a consecuencia de las presuntas omisiones de la Unidad de Parques, no le fue posible al contratista continuar de forma material con la ejecución del contrato.

La inejecución del contrato en su vigencia, provino de hechos ajenos a la voluntad de la Unidad Administrativa de Parques, pandemia del covid 19, y la contrariedad de la población de la región donde se pactó prestar el servicio de ecoturismo.

De acuerdo con el estatuto de la contratación administrativa, Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes, los contratistas se constituyen en colaboradores de la administración pública para los logros y fines sociales del estado, lo que comporta derechos y obligaciones. En nuestro caso, para el contratista no es un secreto los inconvenientes que impidieron continuar con la ejecución del contrato.

En ese contexto, es claro que son hechos sobrevinientes ajenos a la voluntad de Parques Nacionales que impidieron ejecutar el contrato durante su vigencia.

Le necesidad del servicio de acuerdo con las clausulas 1 y 2 del contrato objeto de la presente controversia, se delimitó exclusivamente a un área específica (sector de Lagunillas), de tal manera que al existir hechos ajenos a las partes contractuales que impiden continuar la ejecución del contrato, se consolidaron los presupuestos jurídicos para su terminación.

Sobre el particular, el numeral 1 del artículo 17 de la Ley 80 de 1993, De la terminación unilateral, establece:

“1. Cuando las exigencias del servicio público lo requieran o la situación de orden público lo imponga.”

Parques Nacionales Naturales de Colombia

Nombre Dependencia – Grupo – Área - Territorial

Dirección: Calle 74 No. 11 - 81, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 353 2400

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 129722

Igualmente, estando probado el caso fortuito y la fuerza mayor, que impide la ejecución del contrato, NO da lugar al reconocimiento del perjuicio, de acuerdo con lo establece el artículo 1616 del Código Civil.

Artículo que en su parte pertinente establece:

"La mora producida por fuerza mayor o caso fortuito, no da lugar a indemnización de perjuicios."

Pasando a otro aspecto, es imperioso resaltar la imposibilidad de la parte actora de demostrar los presuntos daños causados, con los elementos de prueba idóneos, dicho de otra manera, las pretensiones gozan de una ausencia total de pruebas.

No se resiste la más mínima discusión jurídica para concluir que no existen los fundamentos de hecho y de derecho que permitan en legal forma condenar a la Unidad Administrativa de Parques Nacionales, al pago de las sumas de dinero reclamadas por la parte accionante.

3. De las pruebas a decretar a favor de la Unidad Administrativa de Parques Nacionales Naturales de Colombia.

Comedidamente solicito del Honorable Despacho Judicial de conocimiento, tener como pruebas documentales las siguientes:

- Copia integral del proceso contractual (acta de suspensión del contrato donde claramente se establece de común acuerdo el reconocimiento de un caso fortuito de y de fuerza mayor), enlace electrónico:

https://drive.google.com/file/d/1IFtvzpz_itMBIrdR5t554_atqCpmpzT/view?usp=sharing_eil_se_dm&ts=65679637

- Copia de las resoluciones:

Resolución 005 del 8 de enero de 2010
Resolución 061 del 7 de febrero de 2020
Resolución 137 del 16 de marzo de 2020

- Se tenga como hecho notorio la pandemia COVID 19.

Así mismo, se decreta interrogatorio de parte (representante legal parte actora), cuyas preguntas se formularán en la oportunidad procesal correspondiente.

Parques Nacionales Naturales de Colombia

Nombre Dependencia – Grupo – Área - Territorial

Dirección: Calle 74 No. 11 - 81, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 353 2400

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 129722

En igual sentido, se decreta el testimonio de la señora Clara Rocío Burgos Valencia identificada con la cédula de ciudadanía 52.312.202, profesional en administración hotelera, quien recibe notificaciones en el correo electrónico: clara.burgos@parquesnacionales.gov.co

Prueba testimonial que tiene por objeto la de acreditar y aclar los hechos que rodearon la ejecución contractual, máxime que la citada profesional prestó el apoyo técnico en la estructuración de los documentos necesarios para la elaboración del contrato de ecoturismo, objeto de la presente acción contractual.

4. De las notificaciones.

Tanto el suscrito como PNNC recibimos notificaciones en el correo electrónico:

notificaciones.judiciales@parquesnacionales.gov.co

5. De los anexos.

- Poder para actuar con los respectivos soportes
- Los documentos señalados en el título de pruebas.

Atentamente,



NEIL ARMSTRONG LOZANO FALLA
C.C. 80.418.734
T.P. 90.880 del C. S. de la J.